

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

41ª REUNIÓN — 23ª SESIÓN ORDINARIA
20 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretario: señor JUAN JOSÉ CANALS

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
AVELIN, Alfredo
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
MAC KARTHY, César
MARANGUELLO, Pedro Carlos
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
PEÑA de LÓPEZ, Ana
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.

RUBEO, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES. CON AVISO:

BITTEL, Deolindo F.
CABANA, Fernando V.
HUMADA, Julio C.
LUDUEÑA, Felipe E.
MARTÍNEZ, Daniel E.
OYARZÚN, Juan C.
ROMERO, Juan Carlos
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SNOPEK, Guillermo E.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VACA, Eduardo P.

EN COMISION:

MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MOLINA, Pedro E.

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

SUMARIO

1. Asuntos entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 4027.)
- II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Marcos Saúl como director del Banco Central de la República Argentina (P.E.-470/95). (Página 4027.)
- III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Pablo Emilio Guidotti como director del Banco Central de la República Argentina (P.E.-499/95). (Pág. 4027.)
- IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción del comodoro (R) Roberto Huerta al grado de brigadier en situación de retiro con anterioridad al 26 de julio de 1976 (P.E.-501/95). (Pág. 4028.)
- V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se comunica el dictado del decreto 1.045/95 por el que se dispone la venta del paquete accionario de Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú Sociedad Anónima (P.E.-465/95). (Pág. 4028.)
- VI. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de Croacia, suscripto en Buenos Aires el 27 de abril de 1994 (P.E.-466/95). (Página 4030.)
- VII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica el Pacto Federal Educativo (P.E.-467/95). (Página 4031.)
- VIII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre ministerio público (P.E.-500/95). (Pág. 4034.)
- IX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se comunica el decreto 446/95 que designa interinamente al señor ministro del Interior doctor Carlos Vladimiro Corach como jefe de gabinete de ministros mientras dure la ausencia de su titular (P.E.-504/95). (Pág. 4046.)
- X. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se remite copia del decreto 471/95 que veta el proyecto de ley sancionado bajo el número 24.541 sobre transfe-

rencia de un inmueble a la provincia de Salta (P.E.-505/95). (Pág. 4046.)

- XI. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 4047.)
- XII. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 4048.)
- XIII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 4048.)
- XIV. Comunicaciones de comisiones. (Página 4049.)
- XV. Comunicaciones oficiales. (Pág. 4049.)
- XVI. Dictámenes de comisiones. (Página 4054.)
- XVII. Peticiones particulares. (Pág. 4058.)
- XVIII. Proyecto de ley del señor senador Cendoya por el que se deroga la Ley 24.432 sobre honorarios profesionales y se restablece la vigencia de la ley 21.839 sobre arancel de honorarios de abogados y procuradores (S.-1.104/95). (Pág. 4059.)
- XIX. Proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicitan informes sobre el funcionamiento del Bono para la Creación de Empleo en los Sectores Privados Provinciales (BOCEP) (S.-1.105/95). (Pág. 4060.)
- XX. Proyecto de comunicación del señor senador Bravo por el que se solicita un subsidio para la Unión Vecinal de Villa Los Andes, de Concepción, San Juan (S.-1.106/95). (Pág. 4060.)
- XXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita un subsidio para el Club Atlético Banfield, de Villa del Carril, San Juan (S.-1.107/95). (Pág. 4061.)
- XXII. Proyecto de ley del señor senador Ludeña por el que se destina una partida en los presupuestos 1996 y 1997 para la construcción de un centro cultural en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz (S.-1.108/95). (Pág. 4061.)
- XXIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se declare de interés nacional la Exposición Internacional del Petróleo, Gas y Productos Afines, el 13º Congreso Latinoamericano de Gas y el Primer Congreso Latinoamericano de Refinación a realizarse en Capital Federal (S.-1.109/95). (Pág. 4062.)
- XXIV. Proyecto de comunicación del señor senador Costanzo por el que se solicita

cación del señor senador Mazzucco por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la realización de un programa de adquisición de tractores para el sector agropecuario. (S.-830/95.) Se aprueba. (Página 4253.)

62. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía en el proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicitan informes sobre el funcionamiento de los Fondos Fiduciarios para el Desarrollo Provincial y para la Capitalización Bancaria. (S.-776/95.) Se aprueba. (Pág. 4254.)
63. Consideración del dictamen de las comisiones de Comunicaciones, de Pesca y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Ludeña por el que se dispone la emisión de sellos postales titulados "Riqueza Marítima Continental Argentina" a partir de 1995. (S.-809/94) Se aprueba. (Pág. 4255.)
64. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Interior y Justicia y de Asuntos Constitucionales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre obligatoriedad de la mediación y conciliación previa a todo juicio. (P.E.-447/94.) Se levanta la sesión. (Pág. 4258.)
65. Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 4271.)

—En Buenos Aires, a las 19 y 14 del miércoles 20 de septiembre de 1995:

Sr. Presidente. — Por haber quórum, damos comienzo a la sesión ordinaria.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados desde la última sesión, cuya nómina se hizo llegar oportunamente a los señores senadores. Este es el momento en que pueden hacer las observaciones que estimen pertinentes.

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 18 de agosto de 1995 por el que se autoriza al señor senador Martínez para viajar a San Pablo (República Federativa del Brasil) desde el 4 hasta el 8 de septiembre del corriente año con motivo de asistir a la realización del primer Work Shop de la Patagonia (D.P.-361/95). (A sus antecedentes.)

—Decreto del 18 de agosto de 1995 por el que se autoriza a los señores senadores Menem, Aguirre Lanari y Solari Yrigoyen para viajar a Oxford (Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte) desde el 12 hasta el 18 de septiembre del corriente año con motivo de asistir a la V Conferencia Argentino-Británica organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (D.P.-362/95). (A sus antecedentes.)

—Decreto del 18 de agosto de 1995 por el que se autoriza al señor senador Alasino para viajar a San Pablo (República Federativa del Brasil) desde el 13 hasta el 16 de septiembre del corriente año con motivo de asistir a la IV Reunión de la Comisión de Asuntos Subregionales, Provinciales, Estaduales y Municipales del Parlamento Latinoamericano (D.P.-363/95). (A sus antecedentes.)

—Decreto del 1º de septiembre de 1995 por el que se designa a diversos señores senadores para ocupar vacante, en distintas comisiones (D.P.-371/95). (A sus antecedentes.)

—Decreto del 4 de septiembre de 1995, suscrito juntamente con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, por el que se designa presidente de la Auditoría General de la Nación al ciudadano doctor Enrique Paixa (D.P.-375/95). (A sus antecedentes.)

II

Acuerdo para la designación del señor Marcos Rafael Saúl como director del Banco Central de la República Argentina. Solicitud. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1995.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (ley 24.144), el acuerdo correspondiente para designar por un nuevo período de ley al señor don Marcos Rafael Saúl (libreta de enrolamiento 8.011.188) como director de la referida institución.

Motiva el presente pedido de acuerdo la circunstancia de que como resultado del sorteo efectuado de conformidad al procedimiento establecido por el artículo 58 de la referida carta orgánica el citado funcionario permanecerá en su actual cargo de director sólo por la mitad del período legal, esto es, tres (3) años.

Se acompaña el currículum vitae correspondiente al funcionario propuesto.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 429

CARLOS S. MENEM.

Eduardo Bauzá. — José A. Caro Figueroa.

—A la Comisión de Acuerdos.

III

Acuerdo para la designación del señor Pablo Emilio Cuidotti como director del Banco Central de la República Argentina. Solicitud. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1995.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, de conformidad con lo establecido por

prenta del Congreso, cuyo costo no será muy elevado ya que se cuenta con la provisión de los originales y clichés que utilizará la Imprenta de Correos y Telégrafos de la Nación.

La distribución estará orientada a los centros educativos regionales y estará a cargo de la Comisión de Pesca.

Por lo anterior es que solicito a mis pares la aprobación de la presente.

Felipe E. Lulueña

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar:

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Secretario (PiuZZi). — La Secretaría informa que se considera votado el anexo.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

64

OBLIGATORIEDAD DE LA MEDIACION Y CONCILIACION PREVIA A TODO JUICIO

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Interior y Justicia y de Asuntos Constitucionales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre obligatoriedad de la mediación y conciliación previa a todo juicio. Se aconseja aceptar las modificaciones de algunos artículos e insistir en otros (Orden del Día N° 546).

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General, de Interior y Justicia y de Asuntos Constitucionales, han considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera enviado en revisión sobre la obligatoriedad de la mediación y conciliación previa a todo juicio, expediente P.E.-447/94, y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante se aconseja:

1º — Aceptar las modificaciones que la Honorable Cámara de Diputados introdujo en los artículos 1º, 3º, 7º, 10, 18 y 27, 34 y 38.

2º — Insistir en la redacción de los artículos 2º, 6º, 12, 16, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 y 37.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 22 de agosto de 1995.

Ricardo A. Branda. — Juan R. Aguirre Lanari. — Guillermo E. Snopek. — Pedro C. Maranguello. — Jorge D. Solana. — Eduardo Menem. — Augusto J. M. Alastino. — Julio C. Humada. — Julio A. San Millán. — José O. Figueroa. — Juan C. Oyarzún.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(Aprobado con los dos tercios de los presentes.
Artículo 81 de la Constitución Nacional)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

MEDIACION Y CONCILIACION

Disposiciones generales

Artículo 1º — Institúyase con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia.

Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa existió mediación ante mediadores registrados por el Ministerio de Justicia.

Art. 2º — El procedimiento de la mediación obligatoria no será de aplicación en los siguientes supuestos:

1. Causas penales.
2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, adopción, emancipación de menores, filiación y patria potestad, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador.
3. Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación.
4. Causas en que el Estado nacional o sus entidades descentralizadas sean parte.
5. Amparo, hábeas corpus e interdictos.
6. Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias, continuando luego el trámite de la mediación.
7. Diligencias preliminares y prueba anticipada.
8. Juicios sucesorios y voluntarios.
9. Concursos preventivos y quiebras.
10. Causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo.
11. Los procesos de trámite abreviado en los que la viabilidad de la pretensión de las partes se determina en base a instrumentos que se basten a sí mismos a tales fines o, cuando sólo

necesiten complementarse con prueba informativa para producir certidumbre.

12. Todas aquellas pretensiones en que a pedido fundado del interesado, el tribunal previa vista del ministerio público y sin contrariar el espíritu de esta ley, exima expresamente la mediación dando razones que justifiquen la exclusión.

La resolución sólo podrá ser recurrida por el ministerio público.

Art. 3º.— En el caso de los procesos de ejecución y juicios de desalojo, el presente régimen de mediación será optativo para el reclamante, debiendo en dicho supuesto el requerido ocurrir a tal instancia.

Del procedimiento de la mediación

Art. 4º.— El reclamante formalizará su pretensión ante la mesa general de recepción de expedientes que corresponda, detallando la misma en un formulario cuyos requisitos se establecerán por vía de la reglamentación.

Cumplida la presentación se procederá al sorteo del mediador y a la asignación del juzgado que eventualmente entenderá en la litis.

Art. 5º.— La mesa general de entradas entregará el formulario debidamente intervenido al presentante, quien deberá remitirlo al mediador designado dentro del plazo de tres (3) días.

Art. 6º.— El mediador, dentro del plazo de cinco (5) días de haber tomado conocimiento de su designación, fijará la fecha de la audiencia, la que deberá ser notificada con cinco (5) días de antelación.

El letrado patrocinante del requirente debe notificar la fecha de la audiencia a las partes mediante cédula, adjuntando copia del formulario previsto en el artículo 4º.

La cédula deberá ser diligenciada por ante la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de la Nación.

Art. 7º.— Las partes podrán tomar contacto con el mediador designado antes de la fecha de la audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones.

Art. 8º.— Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, solicitado por las partes o de oficio, podrá citarlo a fin de que comparezca a la instancia mediadora.

Si el tercero incurriese en incomparecencia o incumplimiento del acuerdo transaccional que lo involucre, le alcanzarán las sanciones previstas en los artículos 10 y 12 de la presente ley.

Art. 9º.— El plazo para la mediación será de hasta sesenta (60) días corridos a partir de la última notificación al requerido y/o al tercero en su caso. En el caso previsto en el artículo 3º, el plazo será de treinta (30) días corridos. En ambos supuestos se podrá prorrogar por acuerdos de las partes.

Art. 10.— Dentro del plazo previsto para la mediación el mediador podrá convocar a las partes a todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley.

Si la mediación fracasare por la incomparecencia de cualquiera de las partes a la primera audiencia, cada uno de los incomparecientes deberá abonar una multa cuyo monto será el equivalente a dos (2) veces la retribución básica que le corresponda percibir al mediador por su gestión.

Habiendo comparecido personalmente y previa intervención del mediador, las partes podrán dar por terminado el procedimiento de mediación.

Art. 11.— Las actuaciones serán confidenciales. El mediador tendrá a plena libertad para sesionar con las partes, pudiéndolo efectuar en forma conjunta o por separado, cuidando de no favorecer, con su conducta, a una de ellas y de no violar el deber de confidencialidad.

A las mencionadas sesiones deberán concurrir las partes personalmente, y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a los domiciliados en extraña jurisdicción de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.

La asistencia letrada será obligatoria.

Art. 12.— Si se produjese el acuerdo, se labrará acta en el que deberán constar los términos del mismo, firmado por el mediador, las partes y los letrados intervinientes.

El mediador deberá remitir al juez competente el acta acuerdo para su homologación, y comunicar el resultado de la mediación, con fines estadísticos, al Ministerio de Justicia.

En el caso de incumplimiento lo acordado podrá ejecutarse ante el juez designado, mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez deberá aplicar la multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 13.— El Ministerio de Justicia de la Nación percibirá con destino al fondo de financiamiento creado por esta ley, las sumas resultantes de las multas establecidas en los artículos 10 y 12. En el supuesto que no se abonen las multas establecidas, se perseguirá el cobro impulsando por vía incidental, las acciones judiciales necesarias observando el procedimiento de ejecución de sentencia.

A tal fin el Ministerio de Justicia certificará la deuda existente y librará el certificado respectivo que tendrá carácter de título ejecutivo.

En el caso de no haberse promovido acción judicial posterior a la gestión mediadora el cobro de la multa establecida en el artículo 10 se efectuará mediante el procedimiento de juicio ejecutivo.

Art. 14.— Si no se arribase a un acuerdo en la mediación igualmente se labrará acta, cuya copia deberá entregarse a las partes en la que se dejará constancia de tal resultado.

En este caso el reclamante quedará habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente, acompañando las constancias de la mediación.

Del Registro de Mediadores

Art. 15. — Créase el Registro de Mediadores cuya constitución, organización, actualización y administración será responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación.

Art. 16. — Para ser mediador será necesario poseer título universitario y adquirir la capacitación y restantes exigencias que establezca la reglamentación.

Art. 17. — En la reglamentación a la que se alude en el artículo anterior se estipularán las causales de suspensión y separación del registro y el procedimiento para aplicar tales sanciones. También se determinarán los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para formar parte del mismo.

De las causales de excusación y recusación

Art. 18. — El mediador deberá excusarse bajo pena de inhabilitación como tal, en todos los casos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para excusación de los jueces, pudiendo ser recusado con expresión de causa por las partes conforme lo determina ese código. De no aceptar el mediador la recusación, ésta será decidida por el juez designado conforme lo establecido en el artículo 4º, por resolución que será inapelable.

En los supuestos de excusación y recusación se practicará inmediatamente un nuevo sorteo.

El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a cualquiera de las partes intervinientes en la mediación durante el lapso de un (1) año desde que cesó su inscripción en el registro establecido por el artículo 15. La prohibición será absoluta en la causa en que haya intervenido como mediador.

De la Comisión de Selección y Contralor

Art. 19. — Créase una Comisión de Selección y Contralor, que tendrá la responsabilidad de emitir la aprobación de la última instancia sobre la idoneidad y demás requisitos que se exijan para habilitar la inscripción como aspirantes a mediadores en el registro establecido por el artículo 15 de la presente ley.

Asimismo la comisión tendrá a su cargo el contralor sobre el funcionamiento de todo el sistema de mediación.

Art. 20. — La Comisión de Selección y Contralor del régimen de mediación estará constituida por dos representantes por cada Cámara del Poder Legislativo, dos del Poder Judicial, dos del Poder Ejecutivo nacional y un representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

De la retribución del mediador

Art. 21. — El mediador percibirá por su tarea desempeñada en la mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme el acuerdo transaccional arribado.

En el supuesto que fracasare la mediación, los honorarios del mediador serán abonados por el Fondo de financiamiento de acuerdo a las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Las sumas abonadas por este concepto, integrarán las costas de la litis que con posterioridad entablen las partes, las que se reintegrarán al fondo de financiamiento aludido.

A tal fin, y vencido el plazo para su depósito judicial, el Ministerio de Justicia promoverá el cobro por vía incidental mediante el procedimiento de ejecución de sentencia.

Art. 22. — El Ministerio de Justicia de la Nación podrá establecer un régimen de reconocimientos no remunerativos para los mediadores que se hayan destacado por su dedicación y eficiencia en el desempeño de su labor.

Del Fondo de Financiamiento

Art. 23. — Créase un Fondo de Financiamiento a los fines de solventar:

- a) El pago de los honorarios básicos que se le abone a los mediadores de acuerdo a lo establecido por el artículo 21, segundo párrafo de la presente ley;
- b) Las erogaciones que implique el funcionamiento del Registro de Mediadores;
- c) Cualquier otra erogación relacionada con el funcionamiento del sistema de mediación.

Art. 24. — El presente Fondo de Financiamiento se integrará con los siguientes recursos:

1. Las sumas asignadas en las partidas del presupuesto nacional.
2. El reintegro de los honorarios básicos abonados conforme lo establecido por el artículo 21, segundo párrafo de la presente ley.
3. Las multas a que hace referencia el artículo 10, segundo párrafo de la presente.
4. La multa establecida por el artículo 12, último párrafo.
5. Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito que se haga en beneficio del servicio implementado por esta ley.
6. Toda otra suma que en el futuro se destine al presente fondo.

Art. 25. — La administración del Fondo de Financiamiento estará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, instrumentándose la misma por vía de la reglamentación pertinente.

Art. 26. — Iniciada la demanda o la ejecución del acuerdo transaccional, el juez notificará de ello al Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que promueva la percepción de las multas, según el procedimiento de ejecución de sentencia.

De la misma forma se procederá con relación al recupero del honorario básico del mediador, una vez que se haya decidido la imposición de costas del proceso.

Honorarios de los letrados de las partes

Art. 27. — A falta de convenio, si el o los letrados intervinientes solicitaren regulación de los honorarios

que deberán abonar sus patrocinados por la tarea en la gestión mediadora se aplicarán las disposiciones pertinentes de la ley 24.432, ley cuya vigencia se mantiene en todo su articulado.

Prescripción

Art. 28. — La mediación suspende el plazo de la prescripción desde que se formalice la presentación a que se refiere el artículo 4º.

Cláusulas transitorias

Art. 29. — El sistema de mediación obligatoria comenzará a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, siendo obligatorio el régimen para las demandas que se inicien con posterioridad a esa fecha.

Art. 30. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional por el término de cinco (5) años a establecer por vía de la reglamentación los aranceles y honorarios previstos en la presente ley.

La obligatoriedad de la etapa de la mediación establecida en el artículo 1º, primer párrafo de la presente ley, regirá por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la puesta en funcionamiento del régimen de mediación de conformidad con lo establecido en el artículo 29.

Art. 31. — Quedará en suspenso la aplicación del presente régimen a los juzgados federales en todo el ámbito del territorio nacional, hasta tanto se implemente por la Comisión de Selección y Contralor el sistema en cada uno de ellos, de las secciones judiciales en donde ejerzan su competencia.

Cuando se implemente el sistema en los juzgados federales del interior de la República la mediación se organizará y administrará, en los términos de la presente ley, por acuerdo entre la Comisión de Selección y Contralor creada por el artículo 19 y los colegios, asociaciones y centros de profesionales del derecho existentes en las respectivas provincias.

Modificación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

Art. 32. — Modifícase el artículo 359 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 359: Dentro de los diez días de contestado el traslado de la demanda, o reconvenición en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, o resueltas las excepciones previas y siempre que se hayan acaecido hechos conducentes acerca de los cuales no hubiera conformidad entre las partes, aunque éstas no lo soliciten, el juez para recibir la causa a prueba o para declararla de puro derecho, procederá a convocar a la audiencia prevista en el artículo 360 del presente código.

Art. 33. — Modifícase el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 360: A los fines del artículo precedente, el juez citará a las partes a una audiencia, que se

celebrará en su presencia bajo pena de nulidad, en la cual:

1. Invitará a las partes a una conciliación de conformidad con lo establecido en el artículo 360 bis.
 2. Fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio y desestimará aquellos que no lo sean.
 3. Declarará en la audiencia, previo traslado a las partes en el mismo acto, si la cuestión fuere de puro derecho, con lo cual la causa quedará concluida para definitiva, o procederá a recibir la causa a prueba fijando aquellas que fueren admisibles.
- La resolución sólo será apelable cuando no hubiere lugar a la apertura a prueba.
4. Recibirá las manifestaciones de las partes si las tuvieran, con referencia a lo prescrito en el artículo 362 del presente código, debiendo decretarla en el mismo acto.

Art. 34. — Incorpórase como artículo 360 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 360 bis: Conciliación. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36, inciso 2, apartado a), en la audiencia mencionada en el artículo anterior, el juez y las partes podrán proponer fórmulas conciliatorias.

Si se arribase a un acuerdo conciliatorio, se labrará acta en la que conste su contenido y la homologación por el juez interviniente. Tendrá efecto de cosa juzgada y se ejecutará mediante el procedimiento previsto para la ejecución de sentencia. Si no hubiera acuerdo entre las partes, en el acta se hará constar esta circunstancia, sin expresión de causas. Los intervinientes no podrán ser interrogados acerca de lo acontecido en la audiencia.

Art. 35. — Incorpórase como artículo 360 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 360 ter: En los juicios que tramiten por otros procedimientos, se celebrará asimismo la audiencia prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, observándose los plazos procesales que se establecen para los mismos.

Art. 36. — Suprímase el artículo 361 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 37. — Modifícase el artículo 362 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará sustituido por el siguiente texto:

Artículo 362: Si en la audiencia prevista en el artículo 360 del presente código, todas las partes manifestaren que no tienen ninguna prueba a producir, o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya

auregada y no cuestionada, la causa quedará conclusa para definitiva y el juez llamará para sentencia.

Art. 38. — Modifícase el artículo 365 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 365: Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvencción, ocurriere o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco (5) días después de celebrada la audiencia prevista en el artículo 360 del presente código.

Del escrito que se alegue se dará traslado a la otra parte, quien, dentro del plazo para contestarlo, podrá también alegar otros hechos en contraposición a los nuevamente alegados. En este caso quedará suspendido el plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los admita o los deniegue.

En los supuestos mencionados en el párrafo precedente, las pruebas podrán recaer también sobre los hechos nuevamente aducidos.

El juez podrá convocar a las partes, según las circunstancias del caso, a otra audiencia en términos similares a lo prescrito en el artículo 360 del presente código.

Art. 39. — Sustitúyese el artículo 367 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 367: El plazo de prueba será fijado por el juez, y no excederá de cuarenta (40) días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la fecha de celebración de la audiencia prevista en el artículo 360 del presente código.

Art. 40. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIENSI
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

Sanción del Honorable Senado de la Nación
(29 de marzo de 1995)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

MEDIACION Y CONCILIACION

Disposiciones generales

Artículo 1º — Créase con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia.

Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaran que antes del inicio de la causa, existió mediación ante mediadores registrados por el Ministerio de Justicia.

Art. 2º — El procedimiento de la mediación obligatoria no será de aplicación en los siguientes supuestos:

1. Causas penales.
2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador.
3. Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación.
4. Causas en que el Estado nacional o sus entidades descentralizadas sean parte.
5. Amparo, hábeas corpus e interdictos.
6. Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias, continuando luego el trámite de la mediación.
7. Diligencias preliminares y prueba anticipada.
8. Juicios sucesorios y voluntarios.
9. Concursos preventivos y quiebras.
10. Causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo.

Art. 3º — En el caso de juicio ejecutivo, el presente régimen de mediación será optativo para el reclamante, debiendo en dicho supuesto el requerido ocurrir a tal instancia.

Del procedimiento de la mediación

Art. 4º — El reclamante formalizará su pretensión ante la mesa general de recepción de expedientes que corresponda, detallando la misma en un formulario cuyos requisitos se establecerán por vía de la reglamentación.

Cumplida la presentación se procederá al sorteo del mediador y a la asignación del juzgado que eventualmente entenderá en la litis.

Art. 5º — La mesa general de entradas entregará el formulario debidamente intervenido al presentante quien deberá remitirlo al mediador designado dentro del plazo de tres días.

Art. 6º — El mediador, dentro del plazo de diez (10) días de haber tomado conocimiento de su designación, firmará la fecha de la audiencia a la que deberán comparecer las partes.

El mediador deberá notificar la fecha de la audiencia a las partes mediante cédula, adjuntando copia del formulario previsto en el artículo 4º. Dicha cédula será librada por el mediador, debiendo la misma ser diligenciada ante la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de la Nación; salvo que el requerido se domicilie en extraña jurisdicción, en cuyo caso deberá ser diligenciada por el requirente.

A tales fines se habilitarán los formularios de cédula de notificación cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente.

Art. 7º — Las partes tomarán contacto con el mediador designado dentro del quinto día de notificadas, con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones.

Art. 8º.— Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, solicitado por las partes o de oficio, podrá citarlo a fin de que comparezca a la instancia mediadora.

Si el tercero incurriese en incomparecencia o incumplimiento del acuerdo transaccional que lo involucre, le alcanzará las sanciones previstas en los artículos 10 y 12 de la presente ley.

Art. 9º.— El plazo para la mediación será de hasta sesenta (60) días corridos a partir de la última notificación al requerido y/o al tercero en su caso. En el caso previsto en el artículo 3º, el plazo será de treinta (30) días corridos. En ambos supuestos se podrá prorrogar por acuerdos de las partes.

Art. 10.— Dentro del plazo previsto para la mediación el mediador podrá convocar a las partes a todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley.

Si la mediación fracasare por la incomparecencia de cualquiera de las partes, cada uno de los incomparecientes deberá abonar una multa cuyo monto será el equivalente a dos (2) veces la retribución básica que le corresponda percibir al mediador por su gestión.

Art. 11.— Las actuaciones serán confidenciales. El mediador tendrá amplia libertad para sesionar con las partes, pudiéndolo efectuar en forma conjunta o por separado, cuidando de no favorecer, con su conducta, a una de ellas y de no violar el deber de confidencialidad.

A las mencionadas sesiones deberán concurrir las partes personalmente, y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a los domiciliados en extraña jurisdicción de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.

La asistencia letrada será obligatoria.

Art. 12.— Si se produjese el acuerdo, se labrará acta en la que deberá constar los términos del mismo, firmado por el mediador, las partes y los letrados intervinientes.

El mediador deberá comunicar el resultado de la mediación, con fines estadísticos, al Ministerio de Justicia.

En caso de incumplimiento, lo acordado podrá ejecutarse ante el juez designado, mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez deberá aplicar la multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 13.— El Ministerio de Justicia de la Nación percibirá con destino al fondo de financiamiento creado por esta ley, las sumas resultantes de las multas establecidas en los artículos 10 y 12. En el supuesto de que no se abonen las multas establecidas, se perseguirá el cobro impulsado por vía incidental, las acciones judiciales necesarias observando el procedimiento de ejecución de sentencia.

A tal fin el Ministerio de Justicia certificará la deuda existente y librará el certificado respectivo que tendrá carácter de título ejecutivo.

En el caso de no haberse promovido acción judicial posterior a la gestión mediadora el cobro de la multa establecida en el artículo 10 se efectuará mediante el procedimiento de juicio ejecutivo.

Art. 14.— Si no se arribase a un acuerdo en la mediación, igualmente se labrará acta, cuya copia deberá entregarse a las partes, en la que se dejará constancia de tal resultado.

En este caso el reclamante quedará habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente, acompañando las constancias de la mediación.

Del Registro de Mediadores

Art. 15.— Créase el Registro de Mediadores cuya constitución, organización, actualización y administración será responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación.

Art. 16.— Para ser mediador será necesario poseer título de abogado y adquirir la capacitación requerida y constantes exigencias que se establezcan reglamentariamente.

Art. 17.— En la reglamentación a la que se alude en el artículo anterior, se estipulará las causales de suspensión y separación del registro y el procedimiento para aplicar tales sanciones. También se determinarán los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para formar parte del mismo.

De las causales de excusación y recusación

Art. 18.— El mediador deberá excusarse bajo pena de inhabilitación como tal, en todos los casos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para excusación de los jueces, pudiendo ser recusado con expresión de causa por las partes conforme lo determina ese código. De no aceptar el mediador la recusación, ésta será decidida por el juez designado conforme lo establecido en el artículo 4º, por resolución que será inapelable.

En los supuestos de excusación y recusación se practicará inmediatamente un nuevo sorteo.

Asimismo el mediador deberá abstenerse por el término de seis (6) meses desde que cesó su inscripción en el registro establecido por el artículo 15, de asesoro o patrocinador a cualquiera de las partes que le hayan confiado la gestión mediadora.

De la Comisión de Selección y Contralor

Art. 19.— Créase una Comisión de Selección y Contralor que tendrá la responsabilidad de emitir la aprobación de última instancia sobre la idoneidad y demás requisitos que se exijan para habilitar la inscripción como aspirantes a mediadores en el registro establecido por el artículo 15 de la presente ley.

Asimismo la comisión tendrá a su cargo el contralor sobre el funcionamiento de todo el sistema de mediación.

Art. 20.— La Comisión de Selección y Contralor del régimen de mediación estará constituida por dos repre-

sentantes del Poder Legislativo, dos del Poder Judicial y dos del Poder Ejecutivo nacional.

De la retribución del mediador

Art. 21. — El mediador percibirá por su tarea desempeñada en la mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme el acuerdo transaccional arribado.

En el supuesto que fracasare la mediación, los honorarios del mediador serán abonados por el fondo de financiamiento de acuerdo a las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Las sumas abonadas por este concepto, integrarán las costas de la litis que con posterioridad entablen las partes, las que se reintegrarán al fondo de financiamiento aludido.

A tal fin, y vencido el plazo para su depósito judicial, el Ministerio de Justicia promoverá el cobro por vía incidental mediante el procedimiento de ejecución de sentencia.

Art. 22. — El Ministerio de Justicia de la Nación podrá establecer un régimen de gratificaciones para los mediadores que se hayan destacado por su dedicación y eficiencia en el desempeño de su labor.

Del Fondo de Financiamiento

Art. 23. — Créase un Fondo de Financiamiento a los fines de solventar:

- a) El pago de los honorarios básicos que se les abone a los mediadores de acuerdo a lo establecido por el artículo 21, segundo párrafo de la presente ley;
- b) Las erogaciones que implique el funcionamiento del Registro de Mediadores;
- c) Cualquier otra erogación relacionada con el funcionamiento del sistema de mediación.

Art. 24. — El presente Fondo de Financiamiento se integrará con los siguientes recursos:

1. Las sumas asignadas en las partidas del presupuesto nacional.
2. El reintegro de los honorarios básicos abonados conforme lo establecido por el artículo 21 segundo párrafo de la presente ley.
3. Las multas a que hace referencia el artículo 10, segundo párrafo de la presente.
4. La multa establecida por el artículo 12, último párrafo.
5. Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito que se haga en beneficio del servicio implementado por esta ley.
6. Toda otra suma que en el futuro se destine al presente fondo.

Art. 25. — La administración del Fondo de Financiamiento estará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, instrumentándose la misma por vía de la reglamentación pertinente.

Art. 26. — Iniciada la demanda o la ejecución del acuerdo transaccional, el juez notificará de ello al Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que promueva la percepción de las multas, según el procedimiento de ejecución de sentencia.

De la misma forma se procederá con relación al recupero del honorario básico del mediador, una vez que se haya decidido la imposición de costas del proceso.

Honorarios de los letrados de las partes

Art. 27. — A falta de convenio, si el o los letrados intervinientes, solicitaren regulación de los honorarios que deberán abonar sus mandantes por la tarea en la gestión mediadora, en ningún caso el monto regulado podrá ser superior al veinte por ciento (20 %) de lo previsto para la primera etapa establecida en el artículo 38 de la ley 21.839.

Salvo convenio en contrario, el honorario mínimo para los abogados a que hace referencia el párrafo anterior, será del veinte por ciento (20 %) del arancel establecido para los procesos de conocimiento previsto en el artículo 8º de la ley 21.839.

Cláusulas transitorias

Art. 28. — El sistema de mediación obligatoria comenzará a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, siendo obligatorio el régimen para las demandas que se inicien con posterioridad a esa fecha.

Art. 29. — La mediación suspende el plazo de la prescripción desde que se formalice la presentación a que se refiere el artículo 4º.

Art. 30. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, por el término de cinco (5) años a establecer por vía de la reglamentación los aranceles y honorarios previstos en la presente ley.

La obligatoriedad de la etapa de la mediación establecida en el artículo 1º, primer párrafo de la presente ley, regirá por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la puesta en funcionamiento del régimen de mediación de conformidad con lo establecido en el artículo 28.

Art. 31. — Quedará en suspenso la aplicación del presente régimen a los juzgados federales en todo el ámbito del territorio nacional, hasta tanto se implemente el sistema en cada uno de ellos, de las secciones judiciales en donde ejerzan su competencia.

Modificaciones al Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación

Art. 32. — Modifícase el artículo 359 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 359: Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los

plazos para hacerlo, resueltas las excepciones previas, y siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa a prueba, procediendo de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 360.

Art. 33. — Modifícase el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 360: A los fines del artículo precedente el juez citará a las partes a una audiencia, que se celebrará con su presencia bajo pena de nulidad, en la que:

- 1º Fijará por sí los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio sobre los cuales versará la prueba y desestimará los que considere inconducentes de acuerdo con las citadas piezas procesales.
- 2º Recibirá las manifestaciones de las partes, si las tuvieren, con referencia a lo prescripto en los artículos 361 y 362 del presente Código, debiendo resolverla en el mismo acto.
- 3º Declarará en dicha audiencia cuáles pruebas son admisibles de continuarse en juicio.
- 4º Declarará en la audiencia si la cuestión fuere de puro derecho con lo que la causa quedará concluida para definitiva.
- 5º Invitará a las partes a una conciliación.

Art. 34. — Incorpórase como artículo 360 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 360 bis: Conciliación. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 inciso 2º apartado a), en la audiencia mencionada en el artículo anterior, el juez y las partes podrán proponer fórmulas conciliatorias.

Si se arribase a un acuerdo conciliatorio, se labrará acta en la que conste su contenido y la homologación por el juez interviniente. Tendrá efecto de cosa juzgada y se ejecutará mediante el procedimiento previsto para la ejecución de sentencia. Si no hubiere acuerdo entre las partes, en el acta se hará constar esta circunstancia, sin expresión de causas. Los intervinientes no podrán ser interrogados acerca de lo acontecido en la audiencia.

Art. 35. — Incorpórase como artículo 360 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 360 ter: En los juicios que tramiten por otros procedimientos, se celebrará asimismo la audiencia prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, observándose los plazos procesales que se establecen para los mismos.

Art. 36. — Modifícase el artículo 361 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 361: Si alguna de las partes se opusiere a la apertura a prueba en la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código, el juez resolverá lo que sea procedente luego de escuchar a la contraparte.

Art. 37. — Modifícase el artículo 362 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará sustituido por el siguiente texto:

Artículo 362: Si en la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código, todas las partes manifestaren que no tienen ninguna prueba a producir, o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, la causa quedará conclusa para definitiva y el juez llamará autos para sentencia.

Art. 38. — Modifícase el artículo 365 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 365: Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvencción, ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco (5) días después de celebrada la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código.

Del escrito que se alegue se dará traslado a la otra parte, quien, dentro del plazo para contestarlo, podrá también alegar otros hechos en contraposición a los nuevamente alegados. En este caso quedará suspendido el plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los admita o los deniegue.

En los supuestos mencionados en el párrafo precedente, las pruebas podrán recaer también sobre los hechos nuevamente aducidos.

El juez podrá convocar a las partes, según las circunstancias del caso, a otra audiencia en términos similares a lo prescripto en el artículo 360 del presente Código.

Art. 39. — Sustitúyese el artículo 367 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 367: El plazo de prueba será fijado por el juez, y no excederá de cuarenta (40) días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la fecha de celebración de la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código.

Art. 40. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO MENEM.
Edgardo R. Piuzei.

Sr. Presidente. — En consideración. Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Este orden del día contiene el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Interior y Justicia y de Asuntos Constitucionales acerca de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a un proyecto de ley sancionado por este Senado, sobre la obligatoriedad de la mediación y conciliación previa a todo juicio. Tal como lo indica el dictamen que obra en las bancas vamos a aceptar algunas modificaciones introducidas a determinados artículos y a insistir en otros artículos según la redacción originariamente aprobada por este Senado.

Estamos asistiendo a esta nueva forma de legislar establecida a partir de la reforma de la Constitución. En virtud de ello, vamos a aceptar las modificaciones impuestas a los artículos 1º, 3º, 7º, 10, 18, 27, 34 y 38; y vamos a insistir con nuestra sanción en el caso de los artículos 2º, 6º, 12, 16, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 y 38. Y respecto del artículo 16, creo que tenemos que constituir la Honorable Cámara en comisión a los efectos de reformar el dictamen efectuado por la mayoría para aceptar la modificación introducida por Diputados.

Oportunamente se hizo llegar a los señores senadores el cuadro comparativo de cómo salió la sanción de este Senado, artículo por artículo, cómo se fue reformando en la Cámara de Diputados y cómo va a quedar actualmente, de acuerdo al dictamen de comisión por mayoría. Es decir que va a haber artículos en los que se va a insistir y otros que se van a aceptar las modificaciones que introdujo la Honorable Cámara de Diputados. De esta forma estamos completando acabadamente la interpretación del artículo 81, según la reforma de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente. — La presidencia quiere aclarar que en este proyecto de ley corresponde votar artículo por artículo. Los artículos que constituyan una insistencia en la sanción de la Cámara se votarán con un número especial; distinto será el caso de aquellos artículos en los que se aceptan las modificaciones de la Cámara revisora. Eso fue lo acordado ayer en la reunión de presidentes de bloque y, en consecuencia, es la interpretación del recinto sobre el procedimiento constitucional. Insisto en que se va a votar artículo por artículo, de forma tal que cada uno de los señores senadores pueda expresar su opinión sobre esos artículos si así lo desea.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: aunque en este asunto actuaré como miembro informante del bloque el señor senador por Córdoba, doctor Cendoya, como presidente de la bancada radical quiero solicitar la postergación de este tema por una semana en virtud de que estaríamos frente a un eventual conflicto institucional respecto de una distinta interpretación de cómo es el mecanismo para sancionar las leyes luego de la reforma constitucional.

En la Cámara de Diputados, cuando se trató este proyecto de la mediación, se discutió cuál podía ser la suerte de esa iniciativa una vez que fuera remitida a la Cámara de origen, o sea, al Senado. Allí, entre muchas consideraciones de los señores diputados, señalaron que el criterio de ese cuerpo es que la Cámara de origen no puede sino aceptar la totalidad de las modificaciones introducidas por la Cámara baja o, de lo contrario, la otra opción es que el Senado, como Cámara iniciadora, insistiera *in totum* en la redacción que sancionara originariamente.

Entre otros argumentos, por ejemplo, se señaló que cada artículo no conforma una unidad en sí misma. Otro diputado dijo que no se puede dar jerarquías diferentes a cada modificación. Otro legislador dijo que cada artículo no es una ley. De tal modo, señor presidente, que hay una distinta óptica o interpretación de cómo funciona el artículo 81 de la Constitución Nacional.

Desde mi punto de vista, pienso que la Cámara de origen puede aceptar parte de las modificaciones realizadas por Diputados y rechazar otras. Para esto no viene a cuento, sino que lo que realmente interesa es que aquí, por la posición asumida por la Cámara de Diputados, hay una situación de distinta interpretación del artículo 81 que puede derivar, por ejemplo, en que si nosotros sancionamos la ley con el criterio que ha indicado el señor miembro informante del bloque Justicialista, y el señor presidente del Senado remite al señor presidente de la Cámara de Diputados el proyecto para su suscripción, el señor Pierri, presidente de la Cámara de Diputados, bien podría no firmarlo.

En esta semana de prórroga que solicitamos podemos buscar concertar con la Cámara de Diputados cuál es el mecanismo de sanción de las leyes a la luz del nuevo artículo 81, a los efectos de evitar una colisión en lo que se refiere a la interpretación de esta norma.

Sr. Presidente. — Senador Genoud: sin perjuicio de que luego le concederé la palabra al bloque Justicialista, lo que esta Presidencia no comprende aún es cuál es la diferencia de cri-

terio con la Cámara de Diputados. Es decir, ¿qué criterio distinto al pautado ayer en nuestra reunión de labor parlamentaria sostiene la Cámara de Diputados?

Sr. Genoud. — Señor presidente: en Diputados sostienen que a la Cámara iniciadora le corresponde optar entre su sanción originaria o la totalidad de la sanción que hizo la Cámara revisora y no votar artículos modificados afirmativamente y rechazar aquellos con los que no está de acuerdo en su modificación, porque entienden que el artículo 81 de la Constitución habla de la sanción en general y no considerando las sanciones artículo por artículo.

Además, hay un despacho en estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado cordobés Maqueda, que se pronuncia de acuerdo con ese criterio.

De tal modo que, si bien comparto la opinión que hicieron conocer algunos presidentes de bloque con relación al artículo 81, creo que estamos frente a una diferencia de criterios en cuanto al funcionamiento de esta norma.

Entiendo que este debate debe ser previamente armonizado entre ambas Cámaras porque, de lo contrario, nos podemos encontrar con que la sanción que le demos hoy al proyecto, si es que lo hacemos contrariando el criterio de la Cámara de Diputados, no cuente luego con la firma del señor presidente de esa Cámara para remitir la iniciativa sancionada al Poder Ejecutivo.

Por supuesto que en este caso la decisión reposa sobre la bancada mayoritaria, pero no deja de ser un tema preocupante porque, de alguna manera, desde el punto de vista parlamentario, estamos sentando precedente para el futuro respecto del modo en que opera la mecánica de sanción de las leyes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: sin perjuicio de que se conceda la prórroga solicitada —en este sentido ya se va a manifestar por sí o por no el miembro informante—, creo que el criterio que el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical manifiesta que sostiene la Cámara de Diputados es totalmente erróneo.

La reforma constitucional ha establecido un procedimiento más ágil para la sanción de las leyes; es decir que ha acordado pasos, pero no cambió esencialmente el espíritu que tiene la revisión. Basta hacer esta consideración para advertir el error.

De acuerdo con la interpretación draconiana que manifiesta el señor senador, si nosotros hoy, al considerar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, entendiéramos que algunas son razonables, es decir que se podrían admitir porque mejoran el texto, tendríamos que rechazarlas totalmente, porque no coincidimos con algunas otras.

Aquí se plantea un caso similar al que ocurrió con el famoso veto a la ley de patentes medicinales. En esa oportunidad, como recordarán los señores senadores, esta Cámara aceptó algunos artículos observados y rechazó otros.

En ese momento, en el Poder Ejecutivo, se elaboró la teoría de que el rechazo o la insistencia tenía que ser total, es decir que no podía ser parcial, cosa que no establece la Constitución. Para estos casos la Carta Magna fija un criterio, que es el de respetar la unidad.

Así, en el caso del veto, se lo admite en forma parcial siempre que se respete la unidad o el espíritu del proyecto, es decir que la ley no aparezca como empachada o que haya normas que no coincidan entre sí.

Este es el límite que se establece para el caso del veto y cuyo criterio también se puede aplicar en el caso de la revisión de las leyes ante la posibilidad de que la Cámara de origen insista. Si no —repito— nos encontraríamos con el criterio arbitrario e irrazonable de que no podemos admitir una mejora que introduzca la Cámara de revisión. Pero para eso está esa Cámara, para procura mejorar la ley. Si aplicásemos ese criterio, habría que rechazar totalmente el proyecto de ley porque no estamos de acuerdo con algunos artículos.

Creo que en caso de duda hay que aplicar un criterio de razonabilidad en favor de la subsistencia de la voluntad de ambas Cámaras en cuanto coincidan; si no, nos pondría en la obligación —fíjense en este caso— de rechazar totalmente la sanción.

Por eso, sin perjuicio del criterio prudente y razonable que propone el señor senador por Mendoza, en el sentido de darnos una semana de plazo, admitir aquel sistema significaría simplemente, coartar la posibilidad de que las leyes se sancionen lo mejor posible y se ajusten al criterio de representatividad que tienen ambas Cámaras, y que es el aceptado por la Constitución Nacional.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Previamente la había solicitado el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Le cedo el uso de la palabra al señor senador por Entre Ríos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: en ocasiones anteriores, como bien lo indica el señor senador por La Rioja, este Senado interpretó esta norma de la Constitución y la Cámara de Diputados admitió tal interpretación porque ese proyecto de ley se sancionó definitivamente y fue elevado al Poder Ejecutivo. Quiere decir que ese dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que aparentemente existe aunque no lo conozco, sería contradictorio con la actitud que anteriormente asumió la Cámara de Diputados.

Lo que terminantemente prohíbe el artículo 81 de la Constitución Nacional es que la Cámara de origen haga correcciones a las observaciones o adiciones que haya hecho la Cámara revisora. Esta es la última parte del artículo 81, que se omite decir.

Entonces, en lo demás juega simplemente el mecanismo y la lógica que se establece para el perfeccionamiento de la ley. Eso indica que es viable el método que nosotros proponemos.

Por ello, señor presidente, en nombre del bloque Justicialista, aceptaremos el pedido de prórroga que nos han solicitado.

Este es un tema que el presidente de la comisión viene estudiando detenidamente porque requiere urgencia. Se está demorando el tratamiento de numerosos proyectos de ley porque se elaboran despachos que luego deben corregirse y esto, indudablemente, demora la aprobación de iniciativas importantes.

Compartimos la preocupación del señor presidente porque es la cuarta o quinta vez que vuelven a comisión temas que ya habían sido despachados. Y esta mora en la que incurrimos redundará en perjuicio de la Cámara y de todo el Congreso.

Con estas breves afirmaciones doy por terminada mi intervención esperando que en el término de una semana podamos dar sanción a este proyecto de ley.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: ahondando y siguiendo el criterio expuesto por los señores senadores por La Rioja y por Entre Ríos, quiero decir que estoy de acuerdo con lo expresado respecto a la interpretación del artículo 81.

Más allá de eso, sería bueno que se puntualice bien cuál será el mecanismo de acercamiento

con la Cámara de Diputados, si se acepta la prórroga por una semana.

Dada la importancia del tema, habría que plantear un mecanismo adecuado de acuerdo porque, si no, estaríamos legislando sobre la base de lo que piensan los diputados.

Creo que sería bueno un acto conciliador y que la Presidencia del cuerpo —esto es una moción concreta— asuma la responsabilidad del acercamiento con las autoridades de Diputados para poder llegar a un acuerdo de interpretación sobre este artículo; de esa forma se podrá dar un trámite ágil a todos los expedientes y proyectos de ley pendientes de tratamiento.

Por lo tanto, acepto la propuesta formulada por el señor senador Genoud, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, de prorrogar una semana el tratamiento de este asunto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: a título de lealtad y de franqueza, yo preferiría que la prórroga fuese *sine die*, porque me parece sumamente infortunado este proyecto de ley, en cualquiera de sus dos versiones. Y lo digo seriamente; si alguna vez hay lugar para discutirlo, lo discutiremos.

Sr. Branda. — Ya lo discutimos.

Sr. Villarroel. — Comparto, sí, plenamente la interpretación que ha hecho el señor senador por La Rioja y, modestamente, agrego algunas otras consideraciones que me parece refuerzan ese criterio.

Por un lado, está el hecho de que esta Cámara se gobierna por un reglamento, el cual tiene una norma expresa que es la que autoriza y la que funda el criterio expuesto por el señor senador por La Rioja. Por otra parte, hay una razón de mayor peso todavía y es que toda norma que constriñe la libertad intelectual del legislador para cumplir su menester, que es precisamente el de legislar, debe ser de interpretación restrictiva.

Y la única restricción expresa y concreta que tenemos es, como bien ha dicho el señor senador por Entre Ríos, la de volver sobre nuestros pasos y desechar totalmente algo que ya hemos sancionado como Cámara de origen. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que la cosa no ofrece dudas.

Fundo brevemente, señor presidente, señores senadores, lo que he dicho al principio. Tiene estado parlamentario el tema del Consejo de la Magistratura. Y debo resaltar dos cosas: por

una parte, ese proyecto es mucho más urgente porque tenemos un plazo constitucional, lamentablemente vencido ya, y, por otra parte, no sé cómo queda esta organización pergeñada del cuerpo de mediadores con relación a la estructura del Poder Judicial, a la que se le añade un órgano que se denomina Consejo de la Magistratura...

Sr. Presidente. — Perdón, señor senador: ahora no estamos tratando ese tema de fondo.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: no pretendo abusar de la paciencia ajena sino que estoy fundando lo que dije al principio sobre el pedido de prórroga.

No me parece que este proyecto de ley sea tan urgente. Y digo además que de la estructura que finalmente tenga el Consejo de la Magistratura, que es ley directamente consecuente con la Constitución, o debe serlo, también depende el régimen del sistema de auxiliares de la Justicia, cosa que creo nadie negará.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: ayer en la reunión de presidentes de bloque tuvimos ocasión de exponer nuestras opiniones al respecto.

Insisto en que me parece ilógico y peligroso pretender que se vote en bloque por sí o por no, sin atender lo que puedan ser algunos aciertos de la Cámara revisora y, al mismo tiempo, rechazar aquello que nosotros consideremos que son errores cometidos al querer rectificar lo que sancionamos originariamente.

Este asunto viene a coincidir con lo que ha dicho recién el señor senador por Catamarca cuando hablaba de una suerte de constreñimiento al legislador. Y esto se emparenta bastante con la figura del mandato imperativo, que me parece muy poco democrática y que atenta contra el mandato representativo libre, que es la esencia de la democracia y la esencia de la convicción y de la conciencia con que debe votar cada legislador.

Con esta tesis que se sostiene en la Cámara de Diputados, y como creo que dije ayer cuando examinamos brevemente este tema en la reunión de labor parlamentaria, nos acercáramos peligrosamente a una especie de antítesis en la cual se va a discutir de Cámara a Cámara.

Y así, en cada Cámara, va a haber opiniones que coincidan y otras que discrepen dentro de la propia mayoría. Es decir, se atenta contra la li-

bertad de conciencia, contra lo que cada uno de nosotros puede votar.

Acá, por ejemplo, si nosotros votamos individualmente, artículo por artículo, es muy posible que dentro de un mismo bloque político, o en la relación de un bloque político con otro, se puedan producir coincidencias y disidencias en cuanto al voto.

Es decir, como bien se ha expresado recién, se va a evitar que podamos aceptar el aporte positivo que pueda realizar la Cámara revisora, cualquiera sea el asunto de que se trate. Tratemos de que no se nos ponga en una situación sin salida: o se acepta lo primero; evitando posibles mejoramientos, o rechazamos todo.

Entonces, yo me prometo consultar —y creo que debemos hacerlo, como uno de los procedimientos a arbitrar— la opinión de especialistas en la materia, que van a venir a hablarnos sin la camiseta puesta de la Cámara de Diputados o de Senadores y sin la camiseta de una facción política, pero que sí vendrán a hablarnos con la experiencia, la serenidad y el mayor juicio que nos puede traer gente que se ha especializado en este tema.

Dé manera que no me parece mal que se postergue este asunto para tener la conciencia tranquila y también para evitar que lleguemos a situaciones como ésta, que son altamente inconvenientes en el juego normal y regular de las instituciones.

Por eso coincido y me parece prudente que busquemos ese camino que sugería recién el señor senador Branda, pero no lleguemos —salvo que se nos den motivos muy elocuentes y persuasivos de que es más conveniente la posición de la Cámara de Diputados— a incurrir en esto que significa —a mi juicio—, de aceptarla, una lesión a la libertad con que debe votar el legislador.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Afortunadamente, aquí hay unanimidad de criterios respecto de cómo debe interpretarse el artículo 81. Yo no hice más que exponer, de algún modo, lo que luego expresaron otros senadores. Donde no hay coincidencia es entre ambas Cámaras.

De manera que, como el señor senador miembro informante del bloque Justicialista había requerido que se explicitara cuál era el mecanismo para conciliar posiciones, sugiero que sean las autoridades de la Cámara, el presi-

dente, el presidente provisional y los vicepresidentes, quienes mantengan a la brevedad, una reunión con sus pares de la Cámara de Diputados y que lo hagan en consulta con los presidentes de bloque. Si de ese modo se arribase a una solución concertada, estaríamos en condiciones de tratar este asunto la próxima semana.

Sr. Cendoya. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Señor presidente: coincidentemente con lo expuesto por el titular de nuestro bloque, entiendo que la interpretación que han dado todos los senadores intervinientes tiene adecuada respuesta en el propio Reglamento de esta Cámara, que resuelve específicamente la cuestión, según me lo hacía recordar precisamente un distinguido funcionario del Senado, el doctor Carrodani, cuando me indicaba que el artículo 175, en su segundo párrafo, ofrece solución acertadamente a la posición que hemos sostenido.

Sr. Presidente. — Señor senador: permíname que lo interrumpa. La presidencia tiene claro el tema del artículo 175. Pero lo que estamos discutiendo acá no es eso, sino la interpretación constitucional del artículo 81 de la Carta Magna que pueden hacer ambas Cámaras.

Sr. Cendoya. — Perfectamente. A eso apuntaba, señor presidente, pero como no tenemos quórum para votar, estaba acumulando antecedentes en favor de la posición de los señores senadores.

En el artículo 175 del Reglamento se dice que, cuando un proyecto viene en revisión, se puede votar en general o artículo por artículo.

Sr. Presidente. — Así es.

Sr. Cendoya. — También el señor senador por Catamarca hizo un cumplido y merecido elogio a la intervención del señor senador por La Rioja sobre este tema. Pero yo entiendo que una frase deslizada en su conocido tratado sobre la reforma de la Constitución, puede haber inducido al error de la Cámara de Diputados. En la conocida obra *La Constitución reformada*, que el doctor Eduardo Menem escribió junto con el doctor Roberto Dromi, se señala concretamente lo siguiente con respecto al artículo 81. Y leo textualmente: "Ahora bien, el artículo establece que si un proyecto es objeto de adición o corrección por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación, precisando si la obtuvo por la mayoría absoluta o por las dos terceras partes de los presentes. Si la votación fue hecha

por la mayoría absoluta, el proyecto vuelve a la Cámara de origen; que no podrá proponer nuevas adiciones [y aquí plantea la opción] y deberá optar entre el proyecto original aprobado por ella o por el enmendado por la Cámara revisora.

Esta interpretación realizada en una observación al artículo, es la que a lo mejor pudo haber provocado el error de la Cámara de Diputados. (*Risas.*)

Sr. Villarroel. — Tal vez, fue escrito por Dromi. (*Risas.*)

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Menem. — Se debe entender que corresponde a cada artículo y no a la sesión tomada en bloque.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Menem. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente. — Señor senador: le solicita una interrupción el señor senador por La Rioja.

Me imagino que se la concede. (*Risas.*)

Sr. Cendoya. — Desde luego, señor presidente.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Lo que dice el libro me está dando la razón, porque se refiere a cada artículo en particular, no al texto en bloque, como lo ha entendido la Cámara de Diputados.

Sr. Cendoya. — Pero la frase no resulta feliz.

Sr. Menem. — Lo que no resulta feliz es la interpretación. (*Risas.*)

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Señor presidente: quería puntualizar que nos resulta particularmente grato tanto a mí como a todos los señores legisladores de nuestra bancada destacar la importancia que ha tenido para el estudio de la nueva Constitución esta gran obra y felicitar nuevamente a sus autores.

Lo dicho, sin perjuicio de que, evidentemente, *errare humanum est*. (*Risas.*)

Sr. Presidente. — Solamente puede errar el que hace. (*Risas.*)

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Señor presidente: indudablemente la sensación que surge de este debate es que queremos convencernos entre nosotros.

Coincido con las palabras expresadas hace un instante por el señor presidente al referirse a las manifestaciones del señor senador por Córdoba.

Me da la sensación de que, en todo caso, lo que nosotros debiéramos resolver es que, con esta interpretación del Senado, el presidente o la mesa de la Cámara —según se resuelva— tomen contacto con la Presidencia de la Cámara de Diputados, y juntos establezcamos los mecanismos administrativos o de derecho parlamentario que den certeza a la interpretación que tomemos en última instancia, que quizá pueda ser una ley interna al estilo de las que reglamenta la Asamblea Legislativa o, simplemente, un acuerdo tácito.

Pero lo que sí parece claro es que nosotros no podemos poner al país ante la inminencia de un conflicto institucional que en el marco constitucional no tendría respuesta. Tampoco podríamos llevar este conflicto ante la corte, ya que no tiene jurisdicción para laudar en un problema interpretativo de la Constitución de esta clase.

Por eso sugiero, señor presidente, que se tomen las manifestaciones de los señores senadores como la interpretación que esta Cámara otorga a este mecanismo constitucional y, con este criterio, el presidente o la mesa de la Cámara establezcan junto con el presidente o la mesa de la Cámara de Diputados los mecanismos institucionales que den certeza a la manera de sancionar las leyes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: como no hay quórum, seguiremos profundizando en este tema.

Para información de los colegas senadores diré que tuve que requerir por escrito la versión taquigráfica para saber cómo fue votado este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Así, he llegado a la conclusión —de acuerdo con los datos aportados por la computadora— de que sólo el artículo 16 fue aprobado por mayoría absoluta; el resto —es decir, todas las nuevas inserciones del articulado— fue aprobado por los dos tercios.

Considero que en este caso habría que buscar los mecanismos para que cuando un proyecto de ley venga en revisión o sea remitido a tales efectos a la Cámara de Diputados, tengamos la información sobre cómo fue votado cada uno de sus artículos. Esta será una importante metodología a efectos de agilizar el trámite legislativo.

En este caso especial, quiero dejar asentado, como precedente, que todas las modificaciones introducidas en esta norma lo fueron con los dos tercios de los votos de los diputados presentes; menos el artículo 16, solamente, que fue aprobado por mayoría absoluta.

Sr. Presidente. — Señor senadores: como el quórum está prácticamente caído y, técnicamente, no necesito proceder a la votación, quiero consensuar lo siguiente.

Las autoridades de la Cámara de Senadores —considerando la interpretación de ustedes— nos reuniremos con las autoridades de la Cámara de Diputados a efectos de buscar un consenso sobre lo que informaré en la reunión de presidentes de bloque a realizarse el martes próximo.

Sr. Alasino. — ¿Cómo?

Discúlpeme, señor presidente, pero estaba estudiando...

Sr. Presidente. — Me parece bien que estudie, señor senador. En instantes podrá estudiar en su despacho.

No se necesita votar lo que haya que decidir; sólo se requiere que haya consenso para que las autoridades de esta Cámara se pongan de acuerdo con las autoridades de Diputados e informen en la reunión de presidentes de bloque. Luego, la incorporación de este texto en la próxima sesión será motivo de un acuerdo entre los presidentes de bloque.

Como han transcurrido los plazos reglamentarios, y en ejercicio de atribuciones de la Presidencia, queda levantada la sesión.

— Son las 20 y 26.